

El pago de Chile

La búsqueda de los 33 mineros atrapados bajo tierra en la mina San José nos ha tomado los nervios y a ratos el alma. Conmueve el drama de los familiares, su maravillosa esperanza y su amargo dolor; también la forma en que se ha involucrado el ministro Golborne, viviendo semanas más intensas que durante toda su exitosa vida profesional.

Junto a sentimientos buenos y nobles afloran también miserias: la implacable búsqueda de responsabilidades; la condena anticipada a los propietarios; las numerosas señales de peligro que entregó la mina y que no fueron atendidas; el comprahuevos de los organismos encargados de la fiscalización; la incomprensible decisión de autorizar la reapertura de la mina.

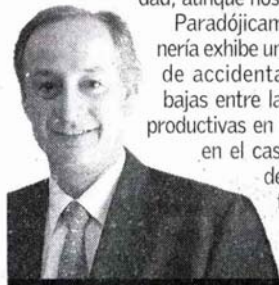
Y es que sin que sepamos aún cuál va a ser el desenlace, se teme lo peor, y allí surge nuestra condición humana que busca explicaciones, responsables, culpables. Es natural, así resuelven las sociedades situaciones que las remecen en sus convicciones y que remueven sus certezas.

En el ámbito judicial se perseguirán las responsabilidades que corresponden y paralelamente se inicia una discusión acerca de la precariedad con que se desarrollan las faenas mineras. Se piden entonces medidas, leyes, recursos. Todo ello habrá de resolver, se cree, los problemas de seguridad en el trabajo, y esto no se volverá a repetir.

Pero no es tan fácil. Leyes tenemos y muchas veces no se cumplen. De partida está la Ley de Accidentes del Trabajo, de larga data en nuestro país y que muestra varios logros en materia de accidentabilidad. ¿Pero qué sacamos con que la Asociación Chilena de Seguridad, en cumplimiento de sus obligaciones, haya emitido un informe señalando los riesgos a que estaban expuestos los trabajadores, si sus recomendaciones no se cumplen? Se requiere fiscalización, sí, pero Sernageomin —que tiene todas las facultades— no actuó.

Nuestras instituciones no acostumbran rendir cuentas. Otra vez lo de siempre: la reforma del Estado es imprescindible, para que las responsabilidades se ejerzan y las obligaciones se cumplan.

¿Y las empresas privadas? Estamos aquí ante un problema cultural. No hay en nuestro país una cultura de seguridad, ni tampoco, lo que es más grave, toda la consideración para con la vida humana que una sociedad que pretende ser desarrollada requiere. Esa es la verdad, aunque nos duela.



Paradójicamente, la minería exhibe una de las tasas de accidentabilidad más bajas entre las actividades productivas en Chile. Incluso en el caso de algunos de los administradores de la ley de accidentes del

trabajo, esa tasa, del orden de 1,8% (significa que en un año, de 100 trabajadores menos de 2 se accidentan), es aún menor que en los servicios financieros, presumiblemente menos riesgosos. ¿Dónde está el problema, entonces? En la brutal disparidad entre unas empresas mineras y otras. En las empresas de la gran minería esa tasa puede llegar a 0,6%, mientras en las minas más pequeñas alcanza casi a 10%.

Y en esta diferencia, además de más recursos, hay una cuestión cultural. Las compañías extranjeras de la gran minería y también las pocas chilenas que incursionan en ese segmento tienen estándares en la materia que son absolutamente distintos a lo que tradicionalmente conoció el sector minero. El mejor ejecutivo es el que no tiene acciden-

tes y es usual en esas empresas que los cambios directivos estén asociados justamente a la ocurrencia de accidentes.

Ojalá pudiésemos incorporar esa mentalidad a nuestra cultura. Pero los políticos chilenos no parecen estar interesados en ese maravilloso aporte que puede hacer la gran minería a nuestro país. Sólo les interesa su dinero. Y allí están, entre cuatro paredes, sentados en una mesa, discutiendo cómo van a repartir los pesos de un nuevo impuesto a la gran minería.

Los mineros no necesitan nuevas leyes ni organismos que protejan sus vidas; necesitan que los que hay funcionen. Tampoco necesitan más plata proveniente de nuevos impuestos a pagar por las empresas; necesitan más consideración con sus vidas. ■

NO HAY EN NUESTRO PAÍS UNA CULTURA DE SEGURIDAD, NI TAMPOCO, LO QUE ES MÁS GRAVE, TODA LA CONSIDERACIÓN PARA CON LA VIDA HUMANA QUE UNA SOCIEDAD QUE PRETENDE SER DESARROLLADA REQUIERE.

LUIS LARRAÍN